

SOCIEDAD CIVIL Y MOVIMIENTOS SOCIALES EN EL SALVADOR DE POSTGUERRA.

Alberto Martín Álvarez¹.

¹ Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México.

E-mail: amartin@mora.edu.mx

Recibido: 3 Marzo 2013 / Revisado: 20 Abril 2013 / Aceptado: 2 Mayo 2013 / Publicación Online: 15 Octubre 2013

Resumen: Este trabajo ofrece un acercamiento de carácter descriptivo y preliminar a algunas de las principales transformaciones experimentadas por la sociedad civil salvadoreña en el periodo de postguerra. Dos rasgos fundamentales sobresalen al analizar la dinámica de la sociedad civil de este país en las últimas dos décadas. De una parte, la emergencia de nuevas identidades políticas que habían sido opacadas por la preminencia del discurso de clase del movimiento revolucionario. De otra, la emergencia de amplias movilizaciones estructuradas en base a coaliciones multisectoriales de organizaciones de la sociedad civil, como respuesta a la implementación de políticas neoliberales.

Palabras clave: Sociedad civil, movimientos sociales, El Salvador, postguerra.

Introducción.

Este trabajo ofrece un acercamiento de carácter descriptivo y preliminar a algunas de las principales transformaciones experimentadas por la sociedad civil salvadoreña en el periodo de postguerra. Dos rasgos fundamentales sobresalen al analizar la dinámica de la sociedad civil de este país en las últimas dos décadas. De una parte, la emergencia de nuevas identidades políticas que habían sido opacadas por la preminencia del discurso clasista del movimiento revolucionario. De otra, la emergencia de amplias movilizaciones estructuradas en base a coaliciones multisectoriales de organizaciones de la

sociedad civil, como respuesta a la implementación de políticas neoliberales.

La resolución negociada del conflicto civil, en el marco de la crisis del “socialismo real” y del pensamiento socialista, y la transformación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en partido político, diluyeron el proyecto de liberación nacional – popular que éste representó históricamente. Ello posibilitó el surgimiento de nuevas identidades políticas – feminismo, ambientalismo - que habían sido dejadas de lado por la preminencia del discurso clasista en el movimiento revolucionario. Esta eclosión fue también posible gracias a la democratización del régimen político que, al abatir las restricciones al derecho de asociación que persistieron durante el periodo de la guerra, y desaparecer la amenaza de la represión contra los opositores políticos, permitió la formación de numerosas organizaciones y redes estructuradas en torno de demandas e identidades específicas. De otra parte, la persistencia durante dos décadas de gobiernos conservadores que implementaron políticas neoliberales, hicieron posible la acción conjunta de una pluralidad de ONG, colectivos, y organizaciones de la sociedad civil, unidas por su oposición a dichas políticas. Por último, la llegada al poder del FMLN en 2009, ha constituido una oportunidad política que algunas organizaciones y movimientos sociales han conseguido aprovechar para promover cambios legislativos, o para introducir asuntos en la agenda política gubernamental. De todo ello se da cuenta en las siguientes páginas.

1. El inicio de la postguerra: “Boom” de las ONG y surgimiento de nuevas identidades políticas.

Hace algunos años Charles R. Hale¹ daba cuenta de la transición experimentada por los movimientos de oposición en América Latina en términos de la erosión de los proyectos nacional – populares y el surgimiento de lo que denominó la “política de la identidad”. Este autor afirmaba que, prácticamente hasta la década de los ochenta del pasado siglo, cualquier proyecto político (incluidos los de carácter socialista) que pretendiera tener éxito en la región debía articular un discurso convincente de “lo popular”. Lo popular se convertía así en una noción abarcadora que pretendía unificar los intereses de un amplio abanico de heterogéneos grupos sociales. A inicios de la década de los noventa, y siguiendo de nuevo a Hale, era ya constatable en todo el continente el hecho de que múltiples sujetos sociales, subsumidos anteriormente en los proyectos nacional – populares, habían comenzado a reclamar sus propios derechos e identidades. La crisis de los marcos ideológicos dominantes durante la segunda mitad del siglo XX, que proveyeron unas identidades estables y bien definidas, abrió paso a un nuevo periodo de auge de movimientos basados en los reclamos identitarios o de estilos de vida de múltiples sujetos: mujeres, indígenas, ambientalistas, comunidad lésbico/gay, entre otros.

Si bien con los matices propios de una situación de postguerra, la observación de Charles Hale retrata en buena medida el panorama de la transición que experimentaron las organizaciones de la sociedad civil salvadoreña desde inicios de la década de los noventa. En este país, el fin del conflicto armado y la consiguiente reconversión del FMLN en partido político, abrieron la puerta al surgimiento de organizaciones y grupos cuyos reclamos habían sido opacados por la preminencia del discurso de liberación nacional – popular construido por el movimiento revolucionario. De otra parte, la desaparición de la represión por motivos políticos, consecuencia del nuevo escenario de democracia representativa, abatió las barreras para la organización y movilización de estos y otros colectivos y organizaciones (ONG de desarrollo, organizaciones de mujeres, ambientalistas e indígenas principalmente).

Desde mediados de la década de los setenta, las organizaciones civiles de oposición en El

Salvador quedaron subsumidas bajo la categoría del “movimiento popular”, al interior de un movimiento revolucionario amplio y complejo. Este movimiento, cuya expresión organizativa fue el FMLN, aglutinó los reclamos sectoriales de una variedad de grupos sociales, dentro de un proyecto socialista que combinaba la aspiración a la liberación de los grupos subordinados de las relaciones de explotación propias del capitalismo (liberación popular), con un reclamo de emancipación nacional, entendido como liberación de la tutela del imperialismo norteamericano (liberación nacional). El cierre de espacios políticos y la represión estatal, junto a la estrategia desplegada por las organizaciones armadas de izquierda, contribuyeron a radicalizar al movimiento popular salvadoreño a finales de los años setenta. El inicio de la situación de guerra generalizada en enero de 1981, se tradujo a su vez en la disolución de las organizaciones del movimiento, y en la inserción de sus militantes al interior de las estructuras político – militares del FMLN. De esta forma, miembros de sindicatos, organizaciones campesinas, estudiantiles, de maestros y de pobladores de tugurios, que con frecuencia habían mantenido una doble militancia - como revolucionarios y como activistas de organizaciones populares- durante el periodo previo, se incorporaron al ejército guerrillero, lo que se tradujo en la virtual desaparición de dicho movimiento durante el periodo 1981 – 1983.

A mediados de esta misma década de los ochenta – y en parte como efecto de la estrategia diseñada por el propio FMLN- el movimiento popular comenzó a reorganizarse en el marco de un contexto político ligeramente más favorable². Así por ejemplo, se produjo el renacimiento de la actividad sindical - en las zonas urbanas, utilizando de nuevo el recurso de la doble militancia clandestina para evitar la represión³.

De la misma forma, el sector de organizaciones de derechos humanos vinculadas de una u otra forma al FMLN, incrementó su densidad y sus actividades de denuncia de la represión ejecutada por las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad y paramilitares en el marco de la guerra⁴. Asimismo, desde mediados de los ochenta, y en el marco de la problemática del exilio y el desplazamiento internos provocados por el conflicto, se produjo el surgimiento de las organizaciones de desplazados y retornados, así como de ONG’s y organizaciones comunitarias dirigidas a proveer servicios de asistencia

sanitaria, educación o alojamiento a la población de los territorios en conflicto, o a los grupos de reasentados procedentes de los campos de refugiados de Honduras⁵.

Esta íntima imbricación entre las organizaciones críticas de la sociedad civil, y la estructura militar del FMLN, provocó que la firma de la paz, la desmovilización del ejército guerrillero, y su transformación en partido político a partir de 1992, supusieran también el inicio de una completa transformación del campo de organizaciones de la sociedad civil en El Salvador. La organización del FMLN durante la guerra era enormemente compleja. Junto a la estructura puramente militar, se encontraban organismos especializados en relaciones internacionales, comunicaciones (radios, agencias de prensa), así como de “trabajo político”. Este último incluía sindicatos, organizaciones de estudiantes, asociaciones campesinas, y organizaciones de derechos humanos, entre otras⁶. La práctica totalidad de estas estructuras o bien fue desmantelada tras finalizar el conflicto, o perdió su conexión orgánica con el FMLN, concentrándose el trabajo organizativo en la construcción de una organización partidaria. En esta situación, una parte de los activistas – especialmente hombres – que habían ocupado cargos de dirección en la estructura militar o política durante el periodo de la guerra – y que poseían un nivel educativo medio o universitario⁷ –, se reubicaron como cargos de dirección del partido. Otra parte de estos activistas con niveles medios y altos de educación formal, se recicló en el trabajo en ONG’s y fundaciones dirigidas en primera instancia a paliar las necesidades más perentorias de los desmovilizados de la guerrilla.

Asimismo, y como se verá más adelante, antiguos cuadros medios del FMLN estuvieron implicados o incluso tuvieron un rol prominente en la fundación de organizaciones feministas y ambientalistas. No está de más señalar que la reinserción en la postguerra de los combatientes “de base” de la guerrilla, que poseían bajos niveles educativos o en muchos casos prácticamente ninguna educación formal, fue un proceso considerablemente más traumático⁸.

Como efecto de la transformación del movimiento revolucionario, los vínculos entre la izquierda política (el nuevo partido FMLN) y las organizaciones críticas de la sociedad civil se debilitaron fuertemente. De otra parte, las propias organizaciones civiles que habían formado parte de lo que se podría denominar la

“periferia” del movimiento revolucionario, comenzaron un proceso de reconstrucción y reacomodo al nuevo contexto político pluralista, en este marco de autonomía política respecto de la izquierda partidaria.

Inmediatamente después de la guerra, los problemas asociados a la reconstrucción de las comunidades más azotadas por el conflicto, y al reasentamiento de ex – combatientes de la guerrilla, concentraron los esfuerzos del pujante nuevo sector de ONG’s surgido en la fase final del conflicto y en los primeros años de la postguerra⁹. Como se mencionó más arriba, parte de estas organizaciones fueron fundadas y/o colonizadas por militantes de las distintas organizaciones del FMLN¹⁰. Al terminar la guerra, en un escenario donde la revolución y el socialismo habían sido desplazados del horizonte, las ONG de desarrollo cumplieron el papel de “estructuras de suspensión” en las que continuar el activismo ahora en un contexto de democracia representativa, y lucha por la supervivencia de los antiguos militantes. Este término ha sido utilizado por algunos estudiosos de los movimientos sociales¹¹ para dar cuenta de aquellas situaciones en las que, enfrentado a un clima político hostil, un movimiento social abandona una política de enfrentamiento directo con el Estado, y se centra en la preservación de sus valores e identidades. En buena medida, el recurso al trabajo en ONG o en el movimiento social, cumplió este cometido para no pocos militantes. El activismo anti – estatal y la lucha por la construcción de una sociedad socialista se vio sustituida por la provisión de necesidades básicas en un contexto de pluralismo democrático y auge del pensamiento neoliberal, con un hilo conductor entre los dos periodos de militancia: el compromiso con los sectores más desfavorecidos, y el trabajo de base con una perspectiva comunitaria.

En origen, lo esencial por tanto era tratar de seguir organizando colectivamente la supervivencia de la antigua base de apoyo campesina de la guerrilla. Con el tiempo, estas organizaciones comenzaron a diversificar sus actividades desde la construcción de viviendas, y el desarrollo de proyectos productivos, hacia los proyectos de salud, el trabajo con mujeres y jóvenes, la provisión de infraestructura básica, la restauración medioambiental a nivel local, entre muchas otras. En un contexto de reestructuración del Estado en clave neoliberal durante toda la postguerra, las ONG de desarrollo tuvieron que asumir toda una gama de servicios esenciales en

las comunidades rurales. De esta forma, y pese a sus importantes limitaciones, este sector de ONG comunitarias se convirtió en uno de los actores principales de las iniciativas de desarrollo local en El Salvador.

En agudo contraste con el sector de ONG de desarrollo comunitario, el movimiento de derechos humanos, que había adquirido una fuerte presencia a mediados de la década de los ochenta, perdió notoriedad y capacidad de movilización de forma acelerada tras el final de la guerra. La liberación de los presos políticos, y la reducción drástica de las violaciones a los derechos humanos como efecto del final de la guerra, privaron a este sector de organizaciones de algunos de los asuntos clave en torno de los que se había organizado su activismo durante la década anterior.

De otra parte, y de acuerdo con Ralph Sprenkels¹², un asunto que dañó muy seriamente el futuro de la labor de organizaciones de derechos humanos en El Salvador fue la *Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz* promulgada en marzo de 1993. Dicha ley cerró a las organizaciones cualquier posibilidad de continuar buscando justicia por los crímenes cometidos durante la guerra, lo cual había sido su razón de ser fundamental desde su fundación. Hay que decir que el FMLN no se opuso a la promulgación de esta ley porque protegía a sus cuadros de dirección de la persecución por causas asociadas a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra, aunque con ello aseguraba también la persistencia de la impunidad por los crímenes cometidos por las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad. Ello explica también, que desde el final de la guerra los derechos humanos dejaran de formar parte de la agenda oficial del partido, y que el FMLN ya no considerara al sector de organizaciones de derechos humanos como un instrumento político de interés. Esto forzó a este sector a autonomizarse del partido, lo cual por otra parte, limitó mucho el impacto que su labor y sus demandas tuvieron en el contexto de postguerra. Otro elemento importante que hay que considerar, y siguiendo de nuevo al mismo autor, es que como consecuencia de los Acuerdos de Paz, la vigilancia y el monitoreo de los derechos humanos fueron reconocidos como una responsabilidad del Estado – creándose incluso una Procuraduría específica como parte del Ministerio Público-, lo que dejaba a las ONG del sector sin un cometido claro. En este contexto, las organizaciones comenzaron a

tener dificultades para continuar financiándose debido tanto a la reducción del apoyo internacional como a la falta de interés del FMLN en apoyarlas. De esta forma, ya a inicios de la década de dos mil, organizaciones como CO-MADRES, o la *Comisión de Derechos Humanos de El Salvador* (CDH-ES), subsistían con un *staff* muy reducido y un bajo nivel de visibilidad de cara a la opinión pública¹³.

Por otra parte, la transformación del FMLN de movimiento revolucionario a organización partidaria llevó aparejado el surgimiento de una serie de identidades políticas que, o bien habían quedado subsumidas y unificadas bajo la categoría del sujeto popular – revolucionario construido por la elite política “farabundista”, o por el contrario, habían sido completamente negadas por el mismo en el marco de las necesidades y presiones de la guerra.

Respecto de las primeras, esto es, de aquellas identidades subsumidas en el discurso revolucionario, se encuentra el movimiento de mujeres, que fue uno de los primeros en aparecer con fuerza en el contexto de postguerra¹⁴. El discurso de liberación nacional – popular del FMLN, construido desde el marxismo – leninismo, incluía a las mujeres en su proyecto emancipatorio¹⁵, pero en realidad, la práctica del movimiento revolucionario contradecía en no pocas ocasiones esta pretensión¹⁶, y desde luego la identidad revolucionaria no otorgaba a la mujer una entidad autónoma e independiente. Con todo, al menos un 30% de la fuerza del FMLN que se desmovilizó en 1992, formada por 15.000 militantes, estaba integrada por mujeres. Y al menos el 80% de la población de apoyo a ese contingente armado estaba también formada por ellas¹⁷. Además, y esta es la clave en este punto, los nuevos roles asumidos por las mujeres en el seno del movimiento revolucionario “desafiaron radicalmente las nociones preexistentes de feminidad”, otorgaron a las mujeres una nueva sensación de empoderamiento, y ayudaron a derribar las barreras de género en la vida cotidiana¹⁸. Frente a todo ello, la reinserción en la postguerra, amenazaba con relegar de nuevo a las activistas al rol tradicional asociado a la esfera estrictamente doméstica. Como afirma Navas¹⁹, para tratar de soslayar la discriminación tanto por parte de la sociedad en general, como del propio FMLN, algunas guerrilleras recién desmovilizadas decidieron organizarse²⁰. Fueron precisamente mujeres que ocuparon cargos de dirección de rango medio y

alto en las distintas organizaciones del FMLN, y que contaban por tanto con un nivel educativo de nivel medio o universitario, las que fundaron algunas de las primeras organizaciones feministas en El Salvador, este es el caso por ejemplo el caso de la *Las Dignas. Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida*, surgida en 1990, del *Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes* más conocido como “Las Mélidas”, fundado en 1992²¹, del *Movimiento Salvadoreño de Mujeres* (MSN), y del *Instituto de Investigación y Desarrollo de la Mujer* (IMU).

En el primer caso, sus fundadoras habían sido militantes de las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN)²² uno de los cinco grupos que compusieron el FMLN, pero buscaron desde el inicio autonomizarse del grupo político – militar. En cuanto a “Las Mélidas”, sus fundadoras provenían de las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL). El MSN se remonta a una iniciativa organizativa del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC), el cual estimuló la fundación de la *Asociación Pro Mejoras de la Mujer y el Niño* (APMN) en 1986²³, y como parte de un esfuerzo de reconstrucción global del movimiento popular, impulsado desde la comandancia del FMLN. A su vez, la APMN dio origen en febrero de 1988 al MSN como organización amplia que aglutinaba a mujeres del campo y la ciudad organizadas por el PRTC. Por su parte, el IMU fue creado en 1986 como una iniciativa vinculada al Partido Comunista Salvadoreño (PCS).

Tras la firma de la paz, las activistas de estas organizaciones, toman conciencia de que la postguerra y la reinserción a la vida civil plantean desafíos específicos para las mujeres, de que se encontraban en una situación de discriminación que las organizaciones revolucionarias no tenían capacidad o voluntad de atender, y de que necesitaban organizarse de forma autónoma para resolver sus propios problemas. El problema de la autonomía respecto del FMLN fue resuelto en inicio de forma diferente en las distintas organizaciones de mujeres. Mientras “Las Dignas” afirmaron desde el principio su separación respecto del grupo político – militar del que provenían (FARN), hecho que fue facilitado posteriormente por la disolución de este y su separación del FMLN en 1995, las activistas de “Las Mélidas” y el IMU optaron por continuar con un esquema de doble militancia y con una

vinculación estrecha con el partido, para con ello continuar abriendo espacios para las mujeres dentro del mismo. Con el paso de los años, y de acuerdo con Garybay²⁴ debido a la falta de compromiso real del Frente con las políticas de género, también estas organizaciones se han ido autonomizando paulatinamente del partido.

A lo largo de las últimas dos décadas, el movimiento de mujeres ha realizado progresos importantes en lo que respecta a la creación y al refuerzo de su propia identidad colectiva, y al establecimiento de un considerable tejido asociativo²⁵. Entre otros muchos asuntos, las organizaciones de mujeres se han implicado fuertemente en cuestiones relativas a las necesidades de salud de mujeres pobres tanto rurales como urbanas²⁶, en la lucha contra la violencia de género, y de forma general en la promoción de la equidad de género. Se puede afirmar que el movimiento ha conseguido considerables éxitos en lo concerniente a la introducción de la cuestión de género en la agenda política nacional. De acuerdo con Navas²⁷, estos se concretan en la contribución del movimiento a la promulgación de una *Ley contra la Violencia Intrafamiliar* en 1996, al establecimiento por la Asamblea Legislativa en 2003 de un finiquito moral para los cargos públicos de elección popular, que no les permite asumir dichos cargos si tienen alguna demanda por paternidad irresponsable, y las políticas municipales de promoción de la equidad de género en San Salvador y otros municipios. A ello habría que añadir que, muy recientemente, y gracias en buena parte a la actividad coordinada del movimiento de mujeres, se logró la aprobación en abril de 2011 por parte de la Asamblea Legislativa, de la *Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres*. Un texto que eleva a política de Estado la lucha contra la discriminación en base al género y cuya elaboración fue impulsada por la *Concertación Feminista Prudencia Ayala*. Por último y de acuerdo con Almeida y Delgado²⁸, las organizaciones de mujeres cumplieron un papel estratégico en las movilizaciones contra los intentos de privatización de la salud de inicios de la década de dos mil. Como estos autores señalan, los servicios públicos de salud constituyen una experiencia cotidiana importante de las mujeres salvadoreñas, y por ello la privatización de la salud fue interpretada por sus organizaciones como una amenaza tanto en su condición de mujeres como de consumidoras.

Por su parte, el ambientalismo constituye una de esas identidades obviadas por el discurso de liberación nacional – popular de la izquierda de los años setenta y ochenta, y que surgió con fuerza tras el final de la guerra. En realidad el origen del movimiento ambientalista salvadoreño, se remonta a la década de los ochenta²⁹, pero fue tras el final del conflicto armado, cuando se produjo una mayor proliferación de organizaciones ecologistas y conservacionistas³⁰ en el país, y ello por varios motivos. Por un lado, porque las contradicciones ambientales generadas por el capitalismo no formaron parte del discurso de la izquierda revolucionaria, que como se ha visto, pretendió erigirse en el representante de todo el movimiento social hasta inicios de los noventa. De otra parte, porque en el marco del conflicto, cualquier iniciativa asociativa no oficial, y cualquier reivindicación frente al Estado, podían ser asociadas con la insurgencia y convertirse en objeto de represión, lo cual desalentó también muy probablemente el asociacionismo ambiental.

Otro elemento importante a tener en cuenta, es que el estallido de la guerra civil ahuyentó las inversiones en explotación de recursos naturales con alto impacto sobre el medio ambiente, como la minería, o la generación de energía. Esta situación cambió a partir de la estabilización política del país, cuando de nuevo se reiniciaron proyectos de explotación de recursos naturales de alto impacto ecológico que provocaron el rechazo de las poblaciones afectadas, y estimularon la organización social en torno de la problemática ambiental. De acuerdo con Cartagena Cruz³¹, entre 1992 y 2007 se produjeron más de cuarenta conflictos ambientales de alto perfil en El Salvador, la mayor parte de los cuales estuvieron relacionados con la expansión de infraestructura en el área metropolitana de San Salvador, con vertidos o vertederos de basura o desechos, con la gestión del agua, y con industrias extractivas³². En dichos conflictos, se implicaron frecuentemente organizaciones ambientales de ámbito local, en coalición con organizaciones comunitarias y con grupos ambientalistas de ámbito nacional. Ejemplos en este sentido lo constituyen la campaña contra la deforestación de la finca *El Espino* en la década de los noventa, y desde 2006, la *Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica* que se enfrenta a la industria minera, y especialmente, a los intentos de la empresa canadiense *Pacific Rim* de iniciar

labores de extracción de oro en el municipio de San Isidro, en el departamento de Cabañas³³ y en San José Las Flores, en el departamento de Chalatenango. El de la minería metálica es con toda seguridad el conflicto ambiental de mayor relevancia social y política de la última década. En la campaña contra la empresa minera, que se inició a nivel local en 2004, se han coaligado organizaciones locales de ámbito comunitario³⁴, –que fueron las que iniciaron la oposición a este tipo de industria por los posibles efectos sobre las fuentes de agua potable–, con organizaciones ambientalistas de ámbito nacional³⁵, o de defensa jurídica³⁶, habiendo recibido el apoyo incluso del Arzobispado de San Salvador. Hay que señalar que, en torno a este conflicto, la movilización ambientalista ha conseguido en 2012 la promulgación, a iniciativa del gobierno del FMLN, de un proyecto de ley que pretende dejar en suspenso las prospecciones de minería metálica en El Salvador.

Es importante señalar que, en algunas ocasiones, antiguos responsables de nivel medio y alto en las organizaciones guerrilleras, fueron los impulsores de la creación de organizaciones de defensa del medio ambiente, o bien se situaron en ellas al finalizar la guerra³⁷. En este sentido, algunas de estas organizaciones, y como en el caso de las ONG de desarrollo comunitario, se han convertido en estructuras de suspensión. En este caso, la presencia de los antiguos cuadros guerrilleros en algunas organizaciones ambientales se refleja en el desarrollo de un ambientalismo cercano al eco-socialismo³⁸, donde el capitalismo neoliberal es considerado la raíz de los problemas ambientales, y la superación de éste el único medio para conseguir unas relaciones armónicas entre los seres humanos y el medio ambiente. Combinan de esta forma una perspectiva anticapitalista inspirada en el marxismo con la defensa de la naturaleza, lo cual explica por ejemplo, la participación de estos ambientalistas críticos en las movilizaciones contra las políticas neoliberales implementadas en el país. No son estas sin embargo, las únicas tendencias del ambientalismo salvadoreño, sino que existen otras orientaciones más apegadas al conservacionismo más moderado, así como un fuerte sector de asociaciones de desarrollo comunal que realizan actividades de protección ambiental en el ámbito local, como señala Cartagena Cruz³⁹.

Mencionar por último y muy brevemente, la emergencia a lo largo de las últimas dos décadas

de otras identidades que, si bien no han alcanzado la misma relevancia social que el movimiento de mujeres o el ambientalismo, han conseguido ocupar un espacio propio en el seno de la sociedad civil salvadoreña. Este es el caso por ejemplo del movimiento indígena, cuya principal expresión organizada es el *Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño* (CCNIS) fundado en noviembre de 1992, y que aglutina a veintitrés organizaciones indígenas náhuatl y lenca⁴⁰. La represión de la rebelión de 1932, significó la estigmatización y negación de la identidad de las comunidades indígenas existentes en el país, hasta el punto de que a lo largo de la segunda mitad del siglo veinte se convirtió en un lugar común afirmar que en El Salvador no existían indígenas. Frente a ello, y desde el final de la guerra, estas organizaciones han contribuido notablemente al fortalecimiento de la identidad cultural de las comunidades indígenas del país, localizadas sobre todo en el occidente salvadoreño⁴¹. Asimismo, se han implicado en la defensa de los recursos naturales de los territorios que ocupan. Como ejemplo de ello cabe mencionar que el CCNIS se ha movilizado en oposición a proyectos de infraestructura como el de la presa *El Chaparral* en el departamento de San Miguel. Otro de los reclamos fundamentales del movimiento indígena en los últimos años ha sido el reconocimiento constitucional, esto es, que la existencia en el país de descendientes de pueblos originarios fuera incorporada al texto constitucional, como una forma de comenzar a revertir la invisibilidad social a la que este colectivo ha sido relegado históricamente, y como un medio para abrir la posibilidad de un reconocimiento de derechos específicos. En este sentido, hay que anotar que las organizaciones indígenas hicieron labores de presión y cabildeo en el poder legislativo para conseguir la aprobación de una reforma constitucional que reconociera formalmente a los indígenas salvadoreños, la cual fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 25 de abril de 2012⁴².

2. Reformas neoliberales y formación de coaliciones multisectoriales de la sociedad civil.

Junto a la erosión del discurso de liberación nacional – popular del FMLN y la emergencia de nuevas identidades políticas en el contexto de la postguerra, la implementación de políticas neoliberales, que aglutinaron en su contra a amplias coaliciones multisectoriales de organizaciones sociales, es probablemente el

otro factor fundamental que ha contribuido a reconfigurar el escenario de la sociedad civil salvadoreña de postguerra. Hay que mencionar que la infraestructura organizativa construida en torno de los reclamos identitarios recién señalados, cumplió un rol importante en dichas movilizaciones, toda vez que los grupos de mujeres, los ambientalistas, las ONG de desarrollo y las organizaciones comunales ocuparon una posición importante en la organización de las protestas de los últimos años. Para entender este proceso, y sobre todo, para comprender el tipo de agravios frente a los que se ha movilizado la sociedad civil salvadoreña en la postguerra, es necesario hacer primero un pequeño recuento de los principales cambios experimentados por la estructura económica de éste país en las últimas décadas.

El conflicto armado de la década de los ochenta provocó cambios profundos en la estructura económica de El Salvador. El desafío planteado por el movimiento revolucionario indujo una profunda transformación de la matriz económica agroexportadora, en torno de la que se había organizado la economía salvadoreña durante todo el siglo XX. La guerra, cuyo escenario principal fueron las aéreas rurales, dislocó la producción de los principales insumos de exportación, y en concreto del café, que constituía hasta finales de la década de los setenta el principal motor de la economía salvadoreña. Junto a ello, las reformas estructurales –reforma agraria, nacionalizaciones de la banca y el comercio exterior- puestas en marcha por gobiernos reformistas desde inicios de la década de los ochenta en el marco del proyecto contrainsurgente, produjeron una transformación importante de la estructura de propiedad de la tierra, y afectaron gravemente los fundamentos del modelo agroexportador como ha demostrado Cardenal⁴³.

La disrupción de la producción cafetalera afectó profundamente la base del poder de la oligarquía terrateniente, produjo importantes cismas políticos en su seno, y estimuló la reorientación de las actividades económicas de una parte de la misma. El sector de la elite económica integrado por procesadores y exportadores de café, y por banqueros e industriales, tuvo mayor capacidad de maniobra ante la ruptura del modelo agroexportador tradicional. Por su parte, la fracción de dicha elite integrada por los propietarios y productores de las haciendas cafetaleras y de otros productos agrícolas de exportación fueron los que vieron más afectados

sus intereses⁴⁴. Como consecuencia de esta situación, fracciones de la elite económica vinculadas a los sectores exportador, industrial y financiero comenzaron a reorientar sus actividades con asesoramiento de agencias dependientes del gobierno norteamericano, para el que la modernización económica de El Salvador constituyó uno de las bases de su proyecto contrainsurgente⁴⁵. Como resultado de esta reorientación productiva, ya desde finales de la década de los ochenta y en los primeros noventa las exportaciones agrícolas no tradicionales, la producción maquiladora, las remesas enviadas por los emigrantes, y el turismo, se habían convertido en los nuevos pilares de la economía salvadoreña. Fue precisamente la fracción de la elite vinculada al sector exportador y financiero el que a finales de la década de los ochenta tomó el control de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el partido de derecha que gobernó El Salvador durante un periodo de veinte años (1989 – 2009).

Una vez en el poder, ARENA puso en práctica una agenda de reformas económicas de orientación neoliberal que fueron completadas en diferentes etapas. Uno de los primeros objetivos de dichas reformas fue la reducción del sector público, dentro de un planteamiento económico ortodoxo de reducción del déficit público y de provisión de recursos para hacer frente a la abultada deuda externa. En esta dirección, y en el marco de los planes de estabilización y ajuste estructural puestos en marcha por el gobierno de Alfredo Cristiani (1989 – 1994), se produjo la re – privatización de la banca y del comercio exterior del café y el azúcar. La agenda privatizadora tomó mayor impulso durante la presidencia de Armando Calderón Sol (1994 – 1999), período durante el cual se produjo la venta de las principales empresas y servicios públicos. Así fueron privatizadas la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), la distribución de energía eléctrica, los ingenios azucareros y el sistema de pensiones, entre otros. Durante el gobierno del presidente Francisco Flores (1999 – 2004), se produjo la dolarización del país, y el intento de privatización parcial del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Por último, durante el último periodo ininterrumpido del partido ARENA en el poder, el del presidente Elías Antonio Saca (2004 – 2009), se puso en marcha una estrategia de desarrollo basada en la promoción de exportaciones a través de la firma de tratados de libre comercio,

constituyéndose en la apuesta fundamental en esta dirección, la adhesión el 15 de julio de 2005 al tratado centroamericano de libre comercio (CAFTA).

Los cambios económicos y sociales provocados por la implementación en varias fases de esta agenda de reformas neoliberales, provocaron amplias movilizaciones de la sociedad civil salvadoreña. Las privatizaciones y el incremento de los impuestos regresivos tenían como objetivo obtener recursos para hacer frente a los compromisos de la deuda externa, como muestran Almeida y Walker⁴⁶. Sin embargo, y como afirman estos mismos autores, al amenazar beneficios económicos y sociales previamente adquiridos por diversos grupos sociales, estas medidas aglutinaron en su contra amplias coaliciones multi - sectoriales con fuerte capacidad de movilización. Las privatizaciones de servicios públicos, las alzas de impuestos o la retirada de subsidios fueron percibidas por los ciudadanos como una erosión de derechos cuyo responsable indiscutible era el gobierno central, el cual se convirtió repetidamente en el objetivo de las movilizaciones contra las medidas de austeridad. Por ello, se puede afirmar, y citando de nuevo a Almeida y Walker, que las principales manifestaciones de la acción colectiva en El Salvador de postguerra han sido de carácter “defensivo”, es decir, han tratado de evitar medidas que suponen “males colectivos” que empeorarían las condiciones de vida de una gran variedad de grupos afectados en caso de llevarse a efecto, lo que explica precisamente el carácter masivo de dichas movilizaciones. Los actores principales de las mismas fueron trabajadores del sector público, obreros, campesinos, estudiantes, ONG de desarrollo, organizaciones de mujeres, y ambientalistas.

Si bien se produjeron respuestas localizadas de parte de la sociedad civil a la implementación de estas medidas económicas ya en los primeros años noventa, estas fueron acciones fragmentadas de los distintos sectores como afirma Paul D. Almeida⁴⁷. De acuerdo con este autor, dichos sectores no fueron capaces de unificar sus luchas, y su principal aliado político, el FMLN, tampoco tenía capacidad en aquel momento para evitar la aprobación de esas medidas en el trámite legislativo. Fue a finales de dicha década, y a inicios de la del dos mil, cuando se originaron fuertes movilizaciones multisectoriales en oposición tanto al intento de privatización del ISSS (1999 – 2003), como – en mucha menor medida – frente a las

negociaciones para la firma del CAFTA (2002 – 2006).

Por lo que respecta a las movilizaciones en contra de la privatización parcial del ISSS, el *Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social* (STISS) coaligado con el *Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto del Seguro Social* (SIMETRIS) fueron las organizaciones que inicialmente se opusieron al intento de privatizar algunos servicios hospitalarios ya desde 1999. Los trabajadores organizaron una huelga de casi cinco meses y fueron secundados por diversos sectores en la organización de hasta una docena de marchas y manifestaciones que llegaron a congregarse hasta 50.000 personas⁴⁸. Como consecuencia de ello, el gobierno de Francisco Flores se vio obligado a retirar la medida en el año 2000.

Ya en 2002, el mismo gobierno trató de introducir un nuevo plan de privatización del sector salud que fue contestado de nuevo en inicio por el STISS y el SIMETRIS, iniciando una huelga que habría de durar casi diez meses – hasta junio de 2003-. Estos sindicatos fueron rápidamente apoyados por coaliciones multisectoriales de organizaciones integradas en el *Foro de la Sociedad Civil* y en la *Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud*, y contaron también con el respaldo del FMLN. El Foro estaba integrado por cincuenta organizaciones sociales entre las que se encontraban organizaciones de mujeres como “Las Mélidas”, de desarrollo como PROCOTES, federaciones de cooperativas rurales como CONFRAS y COACES y organizaciones de desarrollo comunitario como CRIPDES y CORDES. Por su parte, la *Alianza Ciudadana* aglutinaba a treinta ONG, incluidas grupos de mujeres como “Las Dignas” o el IMU, y ONG de desarrollo como FUNSALPRODESE y FUNPROCOOP, entre otras⁴⁹.

La respuesta a este segundo intento privatizador de la salud se expresó de una parte en la mencionada huelga del sector que cerró la mayor parte de las clínicas y hospitales del país, y de otra, en una serie de manifestaciones – las “marchas blancas”- promovidas por el Foro y la Alianza Ciudadana y encabezadas por los sindicatos del sector salud, que reunieron a miles de personas en las calles entre septiembre de 2002 y junio de 2003⁵⁰. Esta segunda campaña contra la privatización de la salud

consiguió movilizar aún a una mayor cantidad de gente en las marchas callejeras, rebasando en ocasiones las 150.000 personas en una sola marcha. Las movilizaciones y la huelga consiguieron parar las medidas privatizadoras de la sanidad pública del gobierno de ARENA, y tuvieron además un sensible costo electoral para éste en las elecciones legislativas y municipales de 2003, en las que fue sobrepasado por el FMLN.

Lo que explica el éxito de esta ola de movilización contra las medidas privatizadoras, en comparación con los fracasos de las movilizaciones de los años noventa, es el hecho de que la privatización de la salud representaba una amenaza para un amplio abanico de grupos sociales que dependen de la sanidad pública como única forma de satisfacer esta necesidad fundamental. De otra parte, y como afirma Almeida⁵¹, el crecimiento de la representación parlamentaria del FMLN se convirtió en otro elemento clave, ya que proveyó de un aliado estratégico a las organizaciones de la sociedad civil y ayudó a articular las amplias coaliciones que se movilizaban en contra de las medidas del gobierno. El partido movilizó a sus bases en apoyo de las protestas, y logró asimismo el apoyo de varios partidos pequeños para parar la privatización en la Asamblea Legislativa en 2002 y 2003, lo que finalmente obligó al gobierno a alcanzar un acuerdo con los huelguistas.

De menor entidad que las movilizaciones contra la privatización de la salud fueron las que se produjeron como respuesta a las negociaciones, la firma, y la entrada en vigor del CAFTA entre 2002 y 2006. La lucha frontal contra el tratado aglutinó a coaliciones⁵² integradas por organizaciones sindicales, religiosas, de indígenas, de desarrollo comunal, de mujeres, de consumidores, campesinos, vendedores callejeros, ambientalistas, estudiantes y al FMLN, junto a un buen número de ONG y redes de activistas internacionales. Pese a ello, la oposición al libre comercio no logró movilizar a la población en la misma medida que lo hizo la privatización del sistema público de salud, y la adhesión al CAFTA fue aprobada por la Asamblea Legislativa en diciembre de 2004.

Como muestra Spalding⁵³, las negociaciones del tratado provocaron además una división de las organizaciones de la sociedad civil salvadoreña, situándose de una parte aquellas que no se oponían por principio al libre comercio con

Estados Unidos siempre que el tratado incorporara propuestas favorables para los países centroamericanos, mientras que del otro lado se ubicaron las organizaciones y coaliciones que se oponían frontalmente al mismo. Esta fragmentación del campo de la oposición al CAFTA contribuyó probablemente a debilitarla y a disminuir su capacidad de influencia sobre el resultado final de las negociaciones.

3. Gobierno, sociedad civil y movimientos sociales desde 2009.

El 1 de junio de 2009 Mauricio Funes asumió el cargo de Presidente de la República respaldado por el FMLN. Su llegada al poder prometía traer consigo el final de las políticas neoliberales que se habían implementado en el país durante veinte años, y con ello también unas relaciones de mayor proximidad entre el poder político y las organizaciones críticas de la sociedad civil. Efectivamente su gabinete, integrado parcialmente por algunos miembros históricos del partido de izquierda, ha puesto en marcha iniciativas que retoman siquiera en parte algunos de los reclamos de la sociedad civil organizada. Algunas de estas medidas ya han sido mencionadas más arriba, como es el caso de la modificación del texto constitucional que posibilita el reconocimiento de las poblaciones indígenas, la medida para mantener en suspenso la minería metálica, o la ley contra la discriminación de género. Junto a ello, hay que resaltar las medidas tomadas para llevar cobertura de salud a los municipios rurales más deprimidos, para incluir a los empleados domésticos en la prestación de salud, la elevación de los salarios de empleados públicos y las pensiones, la entrega de paquetes escolares a estudiantes de bajos recursos, el subsidio al gas propano, las pensiones a ex – combatientes de la guerra civil, entre otras.

Ello no obsta obviamente para que se hayan producido una serie de conflictos sociales localizados a lo largo de estos últimos tres años. Las cuestiones ambientales y, en concreto la lucha contra la minería metálica, ha movilizado a organizaciones críticas de izquierda, hasta la adopción de la medida de suspensión por parte del gobierno. Y aún al momento de escribir este trabajo, los representantes de la *Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica* critican al gobierno al considerar la medida como insuficiente y exigir una prohibición definitiva – no temporal – de este tipo de actividad

extractiva. Asimismo el gobierno tuvo que hacer frente a un conflicto con los sindicatos minoritarios de maestros *Bases Magisteriales* y el *Sindicato de Educadores del Programa Educo* (SIMEDUCO) por la exigencia de aumentos salariales, en enero de 2011. De otra parte, ex – combatientes del FMLN se han movilizado en repetidas ocasiones – la última incluso ocupando la Catedral Metropolitana por 100 días- para demandar la inclusión de los familiares de los ex – combatientes en el sistema de pensiones. En 2011 se produjeron también movilizaciones de los empleados del poder judicial exigiendo aumentos salariales, de vendedores ambulantes, de taxistas y de transportistas. El carácter localizado de estos conflictos, ha movilizado tan sólo a los sectores afectados, mientras que de otra parte, la presencia del FMLN en el gobierno ha posibilitado la canalización de otros conflictos sociales potenciales.

Sin embargo, hasta el momento de escribir este trabajo, las movilizaciones más importantes contra el gobierno del presidente Funes se produjeron en el verano de 2012, en el marco del conflicto entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional, por el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La controversia se produjo por la anulación de parte de la Sala del nombramiento realizado por la Asamblea de diez magistrados de la CSJ, al considerar aquella que una misma legislatura no podía nombrar magistrados en dos ocasiones. Las movilizaciones promovidas por colectivos hasta aquel momento desconocidos como el *Movimiento Patriótico por un mejor El Salvador* (PORMESAL), y alentadas tanto por el partido ARENA como por la *Asociación Nacional de la Empresa Privada* (ANEP), se organizaron en base a un reclamo de defensa de la Constitución y en contra de la supuesta pretensión del FMLN y del gobierno de controlar la Corte Suprema de Justicia. Lo novedoso de estas acciones, que tomaron la forma de grandes marchas callejeras hacia la Asamblea Legislativa, fue precisamente el hecho de que la derecha salvadoreña respaldara este tipo de participación política extra – institucional a la que tradicionalmente se ha mostrado contraria.

Conclusiones.

El fin del conflicto armado, la desmovilización de la fuerza militar de la guerrilla y su transformación en partido político significaron

el inicio de una completa transformación del campo de organizaciones críticas de la sociedad civil en El Salvador. Significó también el surgimiento de una serie de organizaciones estructuradas en torno de identidades específicas. Identidades que habían sido opacadas por la preminencia del discurso de liberación nacional – popular del FMLN, y por la hegemonía de este sobre la sociedad civil desde finales de la década de los setenta y durante toda la guerra. En este sentido, el contexto político abierto por la postguerra ha significado una oportunidad para desarrollar nuevas formas de hacer política, autonomizadas del dominio ejercido por la elite revolucionaria, - ahora convertida en parte de la elite política-, en el marco de la nueva institucionalidad inaugurada por los Acuerdos de Paz de Chapultepec.

Sin embargo, la herencia del movimiento revolucionario no es sólo, ni siquiera principalmente, la de las prácticas del vanguardismo. La movilización revolucionaria ha legado una cultura política reivindicativa y crítica encarnada en aquellos individuos socializados políticamente en el seno del movimiento que tras la llegada de la paz se reciclaron en el activismo ambiental, en la lucha de las mujeres, o en el desarrollo comunitario. En este sentido es patente la herencia que el movimiento revolucionario ha dejado al nuevo campo de organizaciones de la sociedad civil. Buena parte de los antiguos cuadros medios del movimiento, han colonizado o fundado no pocas organizaciones de desarrollo, comunitarias, de mujeres y ambientalistas. Estos activistas, y las organizaciones que dirigen o de las que forman parte, han sido en buena medida responsables de conectar una oleada de movilización – la revolucionaria-, con la siguiente – la anti-neoliberal de primeros años de la década de dos mil-

Las organizaciones de mujeres, las ambientalistas o las asociaciones de desarrollo comunitario han contribuido también a la paulatina democratización del país al introducir demandas de colectivos específicos en la agenda política gubernamental. Lo han hecho también a través de la defensa efectiva de derechos básicos de poblaciones marginadas, vulnerables o con necesidades específicas. En un contexto de postguerra, con un Estado con escasos recursos, orientado además durante dos décadas por políticas que enfatizaban la conveniencia de un Estado mínimo y la mayor eficacia del sector

privado en la gestión de los servicios, las organizaciones de la sociedad civil han contribuido a hacer efectivos los derechos de ciudadanía de amplias capas de la población. Han cumplido también un papel de defensa de la ciudadanía frente a la intromisión de las fuerzas del mercado. El tejido asociativo surgido después de la guerra ha sido responsable de algunas de las campañas más importantes de oposición a las políticas neoliberales en el país. En este sentido, es interesante destacar que por ejemplo las organizaciones de mujeres, han estado recurrentemente presentes en estas movilizaciones organizadas en torno de la defensa de bienes públicos, integrando en su discurso valores materiales y post-materiales.

Sin embargo, el itinerario histórico reciente de la sociedad civil crítica en El Salvador presenta también numerosas zonas de sombra. La derrota sufrida por las movilizaciones contra el CAFTA y las divisiones generadas entre las organizaciones por las diferentes posturas ante el mismo, o la incapacidad para detener la política de privatizaciones de los primeros años noventa, son muestras de ello. Otra cuestión importante es la referida a cuál es la verdadera presencia social y capacidad de movilización de muchas de estas organizaciones. Esto es, en qué medida se ha incrementado la participación política de los salvadoreños a través de estas organizaciones en las últimas décadas. Algunos trabajos académicos recientes apuntan a que de forma cotidiana dicha participación es muy reducida si se la compara con la que se produce en otras organizaciones de escaso o nulo contenido político – organizaciones religiosas-, asunto éste que amerita una investigación de mayor alcance que la que respalda estas páginas. De otra parte, la actual coyuntura caracterizada por la existencia de un gobierno de izquierda apoyado e integrado en parte por el FMLN, provoca que la cuestión de la autonomía de la sociedad civil vuelva a pasar al primer plano. La postura de apoyo crítico hacia el gobierno que – con matices- buena parte de las organizaciones más críticas han mantenido hasta el momento, podría tener un alto costo en términos de desmovilización o pérdida de credibilidad de sus bases, si los logros prometidos en ciertos aspectos cruciales no logran concretarse.

Notas.

¹ Hale, Charles R., “Cultural Politics of Identity in Latin America”, *Annual Review of Anthropology*, 26, 567-590, 1997.

² Se hace referencia en concreto a un cierto descenso de la represión en las zonas urbanas.

³ Véase: Pirker, Kristina, “La redefinición de lo posible: Guerra civil y proceso de paz en biografías de militantes de la izquierda salvadoreña”, *Revista Centroamericana de Ciencias Sociales*, Vol. IV, n°2, 3-29, 2007.

⁴ Sprenkels, Ralph, *The Price of Peace. The Human Rights Movement in Postwar El Salvador*. Amsterdam, CEDLA, 2005.

⁵ Al respecto véanse entre otros por ejemplo: Foley, Michael, “Laying the Groundwork: The Struggle for Civil Society in El Salvador”, *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, Vol. 38, n° 1, 67-104, 1996.; Todd, Molly, *Beyond Displacement. Campesinos, Refugees, and Collective Action in the Salvadorean Civil War*. Madison, The University of Wisconsin Press, 2010.

⁶ Martín Álvarez, Alberto, “De guerrilla a partido político: El FMLN”, *Historia y Política*, 25, 207 – 233, 2011.

⁷ El nivel educativo fue una de las claves de la capacidad de reinserción de los ex – combatientes y de su permanencia o no en el activismo político como han demostrado Viterna y sus colegas: Viterna, Jocelyn.; Sadasivam, Ramaah; Wilbon, Andrea, “The Gendered Consequences of Guerrilla Participation in El Salvador”, Conference Paper, American Sociological Association Annual Meeting, Philadelphia, 2005.

⁸ Garibay, David, “A peace built on forgetting demobilized combatants in post-war El Salvador”, *International Social Science Journal*, 58, 467-478, 2006.

⁹ Por ejemplo, la *Fundación REDES*, nacida en 1989 para acompañar a desplazados y retornados fundamentalmente en inicio en territorios de control de las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, la *Asociación de Proyectos Comunes de El Salvador* (PROCOMES), surgida en 1988 con una finalidad similar, la *Asociación para el Desarrollo de El Salvador* (CRIPDES) fundada en 1984 para apoyar a población desplazada, así como la fundaciones CORDES, FUNSALPRODESE, ADES, y un largo etcétera. Cada una de estas organizaciones estaba en inicio vinculada de una u otra forma con alguno de los cinco grupos del FMLN. Véase Foley, Michael, “Laying the Groundwork”, op. cit.

¹⁰ Obviamente no todo el sector de ONG’s de desarrollo estaba alineado o simpatizaba con el movimiento revolucionario, el panorama es mucho más complejo teniendo en cuenta que hacia 1992 había alrededor de 700 ONG de desarrollo trabajando en el país. Ver: Smith – Nonini, Sandy, *Healing the body politic. El Salvador’s Popular Struggle for Health Rights from Civil War to Neoliberal Peace*. New Jersey, Rutgers University Press, 2010, 231.

¹¹ Ver: Taylor, Verta, “Social movement continuity: The women’s movement in abeyance”, *American Sociological Review*, 54, pp. 761-774, 1989; Sawyers, Traci M.; Meyer, David. S., “Missed Opportunities: Social Movements Abeyance and Public Policy”, *Social Problems*, Vol. 46, n° 2, 187-206, 1999.

¹² Sprenkels, Ralph, *The Price of Peace*, op. cit., 84.

¹³ Sprenkels, Ralph, *The Price of Peace*, op. cit., 81.

¹⁴ Algunas organizaciones de mujeres fueron fundadas ya a mediados de los ochenta, como por ejemplo la *Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz* (ORMUSA).

¹⁵ Navas, María Candelaria, “De guerrilleras a feministas: Origen de las organizaciones de mujeres post – conflicto en El Salvador: 1992 – 1995”. Ponencia presentada en el Segundo Encuentro Nacional de Historia, San Salvador, El Salvador, 2007, 5.

¹⁶ Ver: Vázquez, Norma; Ibáñez, Cristina; Murguialday, Clara, *Mujeres – montaña. Vivencias de guerrilleras y colaboradoras del FMLN*, Madrid, Horas y Horas, 1996; Garibay, David, “Un partido de izquierda radical frente a las reivindicaciones de género: Entre el estancamiento de los números y la afirmación de la radicalidad. El caso del FMLN en El Salvador”, *Política*, 46, 141-171, 2006.

¹⁷ Luciak, Ilja, *After the Revolution: Gender and Democracy in El Salvador, Nicaragua and Guatemala*. Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2001.

¹⁸ Viterna, Jocelyn.; Sadasivam, Ramaah; Wilbon, Andrea, “The Gendered Consequences”, op. cit., pp. 16 – 17.

¹⁹ Navas, María Candelaria, “De guerrilleras a feministas”, op. cit., 10.

²⁰ En algunos casos, esta toma de conciencia de la discriminación por razón de género se produjo ya antes de la finalización del conflicto.

²¹ Candelaria Navas refiere que entre 1978 y 1983 y en el seno de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) fue creada la Asociación de Mujeres de El Salvador (AMES), impulsada por Tula Alvarenga, esposa del fundador de dicha organización armada, Salvador Cayetano Carpio, Navas, María Candelaria, “De guerrilleras a feministas”, op. cit.

²² Con un papel destacado de Morena Herrera y Gloria Castañeda. Morena Herrera, fundadora de “Las Dignas”, en entrevista con el autor, San Salvador, 2 de febrero de 1998.

²³ “Surgimiento del Movimiento Salvadoreño de Mujeres”, disponible en la web de la organización: <http://www.mujeresmsm.org/docs/SurgimientoDelM SM.pdf>, consultado el 18 de agosto de 2012.

²⁴ Garibay, David, “Un partido de izquierda radical”, op. cit., 141-171.

²⁵ Habiendo establecido incluso una coordinadora que aglutina a las veinte organizaciones feministas más importantes del país: la *Concertación Feminista Prudencia Ayala*.

²⁶ Cuestiones en las que al menos el 25% de las organizaciones del movimiento trabaja. Ver:

Almeida, Paul; Delgado, Roxana, “Gendered Networks and Health Care Privatization”, *Advances in Medical Sociology*, Vol. 10: 273-299, 2008, 14.

²⁷ Navas, María Candelaria, “De guerrilleras a feministas”, op. cit., 374.

²⁸ Almeida, Paul; Delgado, Roxana, “Gendered Networks”, op. cit.

²⁹ El Centro Salvadoreño de Tecnología Apropriada (CESTA), la más antigua organización ambiental de El Salvador, fue fundado en 1980.

³⁰ Por ejemplo, la *Unidad Ecológica Salvadoreña* (UNES), probablemente la ONG ambiental más importante del país actualmente, fue creada en 1992.

³¹ Cartagena Cruz, Rafael Ernesto, *Metabolismo socio – natural y conflictos ambientales en Costa Rica y El Salvador, 1992 – 2007*. Tesis de doctorado en Ciencias Sociales, FLACSO, Costa Rica, 2009.

³² Pese a que estos últimos no han sido muy numerosos, han sido muy importantes por su impacto en la opinión pública, por la fuerte oposición que han generado de parte de la sociedad civil, y especialmente, por los hechos de violencia contra activistas ambientalistas que se han registrado.

³³ Zucker, Gabriel, “El Salvador: Mining the Resistance”, *Monthly Review*, 40-50, 2010.

³⁴ En el caso de Cabañas, la *Asociación de Desarrollo Económico de Santa Marta* (ADES), que nació como organización de desarrollo comunitario vinculada a los retornados que formaban parte de las bases de apoyo de las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN).

³⁵ Como por ejemplo UNES.

³⁶ Como la *Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho* (FESPAD).

³⁷ Es el caso por ejemplo de FUNDALEMPA y de la *Unidad Ecológica Salvadoreña* (UNES).

³⁸ La UNES es el ejemplo más claro de esta orientación.

³⁹ Cartagena Cruz, Rafael Ernesto, *Metabolismo socio – natural*, op. cit., 6.

⁴⁰ Junto a este se encuentran otras organizaciones relevantes como la *Asociación Nacional de Indígenas Salvadoreños* (ANIS), la *Asociación Coordinadora de Comunidades Indígenas de El Salvador* (ACCIES) y *Rescate Ancestral Indígena Salvadoreño* (RAIS).

⁴¹ De acuerdo al censo de 2007, la población indígena estimada en El Salvador es de alrededor de 12.000 personas, un 0.2% de la población total. Estas cifras fueron contestadas desde el propio movimiento indígena al considerar que la información no fue recogida correctamente y que, en consecuencia, se minimizaba el número de habitantes indígenas en el país.

⁴² Se ha incorporado un inciso al artículo 63 constitucional con el siguiente texto: “El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad.”. Extraído de la página web de la Asamblea Legislativa de El Salvador:

http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/reformase-la-constitucion-de-la-republica-2/archivo_documento_legislativo. Consultado el 25 de agosto de 2012.

⁴³ Cardenal, Ana Sofía, *La democracia y la tierra. Cambio político en El Salvador*. Madrid, CIS, 2002, 85.

⁴⁴ Cardenal, Ana Sofía, *La democracia y la tierra*, op. cit., 91.

⁴⁵ Robinson, William J., *Transnational Conflicts. Central America, Social Change and Globalization*. London, Verso, 2003, 88.

⁴⁶ Almeida, Paul D.; Walker, Erica, “El avance de la globalización neoliberal: una comparación de tres campañas de movimientos populares en Centroamérica”, *Revista Centroamericana de Ciencias Sociales*, Vol. IV, N°1, 51-76, 2007.

⁴⁷ Almeida, Paul, D., “El Salvador: Elecciones y movimientos sociales”, *Revista de Ciencia Política*, Vol. 30, n° 2, 319-334, 2010.

⁴⁸ Freedman, Elaine, “Medicinas: Una lucha entre ricos y pobres”, *Envío Digital*, n° 348, 2011.

<http://www.envio.org.ni/articulo/4307>, consultado el 26 de agosto de 2012.

⁴⁹ Almeida, Paul; Delgado, Roxana, “Gendered Networks”, op. cit., 287; Almeida, Paul, D., “El Salvador: Elecciones y movimientos sociales”, op. cit., 325.

⁵⁰ Smith – Nonini, Sandy, *Healing the body politic*. op. cit., 239.

⁵¹ Almeida, Paul, D., “El Salvador: Elecciones y movimientos sociales”, op. cit., 367.

⁵² Por ejemplo, la *La Red de Acción Ciudadana Frente al Comercio e Inversión - Sinti Techan* – surgida en el año 2000-, el *Bloque Popular Social* (BPS), – surgido en setiembre de 2003 -, y el *Movimiento Popular de Resistencia 12 de Octubre* (MP-12) – surgido también en 2003-, estos dos últimos estrechamente conectados al FMLN.

⁵³ Spalding, Rose J., “Civil Society Engagement in Trade Negotiations: CAFTA opposition movements in El Salvador”, *Latin American Politics and Society*, n° 49 (4), 85-114, 2007.